

Clara Elena Suárez Argüello

El parecer de la élite de comerciantes del Consulado de la ciudad de México ante la operación del libre comercio (1791-1793)

1. Introducción

A raíz del paulatino establecimiento del libre comercio en los territorios de la Corona española se generaron grupos afectados por los cambios y modificaciones que se pusieron en práctica; hubo una serie de manifestaciones de inconformidad y protestas, lo que llevó a que las autoridades metropolitanas se preocuparan por esta situación. Si bien los aires de las nuevas políticas comerciales se iniciaron casi al arribo de los Borbones al trono, fue con Carlos III cuando se observó ya un régimen más sistemático. Tanto en la península como en algunas de sus posesiones americanas empezaron a darse modificaciones desde 1765, aunque se establecieron oficialmente a partir de 1778, fecha en la que arribó la última flota a la Nueva España; sin embargo, no fue sino hasta 1789 cuando esta libertad de comerciar en todos sus aspectos habría de incluir al virreinato novohispano.¹

Desde octubre de 1787, en San Lorenzo del Escorial, el rey, preocupado por el impacto que pudieran tener estas medidas y las circunstancias en las que se encontraba el comercio internacional, giró reales órdenes a los consulados de Cádiz y de México solicitando noticias al respecto, a lo que éstos respondieron con sendos informes.²

¹ La real orden que abolía el sistema de flotas se emitió el 30 de octubre de 1787. En 28 de febrero de 1789 se emite otra real cédula en que se determina la libertad de comercio de frutos y manufacturas nacionales de Nueva España y Venezuela (Chávez Orozco 1960: x-xi).

² Extracto del informe hecho al rey por el Consulado de Cádiz sobre la situación del comercio entre España y las Indias, s. f., con notas y observaciones firmadas por Antonio Flores, Salamanca, 5 de mayo de 1788. En: Florescano/Castillo 1975-76, I: 139-164; Informe del Consulado de Comerciantes de México al rey sobre la situación del comercio y la economía de Nueva España, México, 31 de mayo de 1788. En: *Ibíd.*, I: 69-137.

Por su parte, el Consulado de la ciudad de México promovió una junta general en donde comisionó a ocho de sus miembros para dar respuesta, lo que se realizó a fines de mayo de 1788.³ El Consulado estableció su posición con un largo memorial de 185 artículos (Florescano/Castillo 1975-76, I: 69-137), en donde trataba diversos aspectos de la economía, tales como problemas del comercio marítimo, escasez en la circulación monetaria, el pago de derechos gravosos, la dificultad de trámites que se debían seguir, los gustos y las demandas del consumo, el estado de la agricultura, la problemática a que se enfrentaba en el comercio con Perú, y los problemas de la minería por la escasez de azogue y otros insumos.

Por supuesto, el Consulado de comerciantes asumía una posición contraria al libre comercio, lo que llevó a que el virrey Revillagigedo realizase una indagación al respecto para conocer en términos más precisos cómo se desarrollaba el comercio en la Nueva España: si había mostrado un incremento o si se había visto afectado negativamente.⁴ Con este propósito, Revillagigedo giró las instrucciones pertinentes para que tanto algunos funcionarios relacionados con el comercio⁵ como los comerciantes más connotados y que se consideraban afectados en sus intereses,⁶ dieran su opinión respecto a esta problemática. Se enviaron a estos sujetos oficios reservados, firmados por el propio virrey, en donde se les preguntaba su opinión respecto a sí consideraban que había decadencia en el comercio, y en caso afirmativo,

³ Informe del Consulado de México sobre el comercio libre, México, 31 de mayo de 1788, MNM, ms. 569, doc. 9. AGI, Méx. 1554: Testimonio sobre el expediente formado sobre averiguar si hay o no decadencia en el comercio, f. 3v-4r. Florescano/Castillo (1975-76, I: 70).

⁴ Testimonio sobre el expediente formado sobre averiguar si hay o no decadencia en el comercio, f. 1r-168v, AGI, Méx. 1554. Este expediente es fundamentalmente la base del ensayo. También se encuentra en el AGNM, Cons. 123, exp. 1. Se trabajó con el manuscrito del AGI.

⁵ Los funcionarios a los que se les pidió su opinión eran el oidor Eusebio Bentura Beleña, el fiscal de Real Hacienda, Ramón de Posada, el superintendente de la Aduana, Miguel Páez de la Cadena, y el fiscal de lo Civil, Lorenzo Hernández de Alva.

⁶ Los comerciantes a los que el virrey pidió su opinión eran doce: Antonio de Basoco, Isidro de Ycaza, Francisco Ignacio de Iraeta, Diego de Agreda, Juan Fernando Meoqui, Gaspar Martín Vicario, Ramón de Goicochea, Pedro Angel Puyade, Lorenzo Guardamino, Manuel García Herreros, Juan Antonio Yermo y Vicente Francisco Vidal.

cuáles consideraban eran las causas, así como las propuestas pertinentes para resolverla.

Revillagigedo apuntaba que aun cuando el establecimiento del libre comercio se había llevado a cabo por instrucciones de Carlos III con el mejor ánimo de fomentar y extender el intercambio de mercancías, en la Nueva España existía el clamor de una gran decadencia que se iba extendiendo en todo el territorio. Añadía que eran relativamente pocas las personas que pensaban lo contrario, y que inclusive se consideraba que las ganancias obtenidas, habiéndose subdividido en muchas manos, eran menores que antes del establecimiento del libre comercio. Fue a mediados del año de 1791, cuando Revillagigedo decidió realizar la indagatoria, preocupado por los rumores e inconformidades existentes en la ciudad de México en esos momentos, lo que le hizo tomar cartas en el asunto, estructurando un grueso expediente con diversos puntos de vista.

Durante el segundo semestre del año de 1791, los comerciantes y funcionarios fueron presentando los informes solicitados por Revillagigedo.⁷ Pero en diciembre de este mismo año, al ver los grandes comerciantes de la ciudad de México disminuidas sus ganancias y encontrar que sus tráficos mercantiles venían a menos, decidieron enviar al prior y cónsules del Real Tribunal del Consulado una representación con la que mostraban su inconformidad y le solicitan a éste que asumiera su papel y promoviera sus intereses. El escrito, firmado por los 115 comerciantes que se encontraban matriculados en el Consulado, establecía como punto principal “a que Su Majestad se digne disminuir un 3 o 4% de alcabala de lo que se introduzca con final parade-ro, atendiendo a las circunstancias de la propia capital [...]” (Florescano/Castillo 1975-76, I: 248). En los inicios de 1792, el Consulado, adjudicándose la representación realizada por sus miembros, solicitó al virrey Revillagigedo tres peticiones para modificar la situación de sus representados: la primera consistía en el “indulto” del 3% a la alcabala en Veracruz por la mercancía que ingresaba, solicitando que solamente se cobrase el 6% de alcabala sobre la venta de mercancía; la segunda petición, referida a suspender la introducción continua de efectos, recomendaba que para ello se señalaran tiempos determinados, considerando que lo más conveniente eran los envíos anuales en

⁷ AGI, Méx. 1554, f. 1r-128v.

los productos nacionales y de dos a tres años para los géneros extranjeros. El último punto se refería a la continua extracción del circulante que impedía un libre desarrollo del comercio, por lo que se sugería también que su salida fuera anual (*ibid.*: 252-258). La representación fue enviada para su evaluación al fiscal de Real Hacienda, don Ramón de Posada, que a fines de enero de 1792 emitió su dictamen (*ibid.*: 259-269).

Ante esta situación, y no contento con los resultados de la primera parte de la indagación que había iniciado en junio de 1791, así como por una nueva real orden que le llegó el 28 de marzo de 1792, Revillagigedo decidió ampliar la investigación pidiendo nuevas opiniones. Así solicitó que el director de alcabalas, don Juan Navarro, el ministro del Tribunal de Cuentas, don Pedro Monterde, el ministro contador de las Cajas Reales de Veracruz, don Juan Matías de Lacunza, y un par de comerciantes radicados en Veracruz, don Thomas Murphy y don José Ignacio Uriarte, hicieran una evaluación y expresaran su opinión.

Las diversas opiniones expresadas por comerciantes y funcionarios en el grueso expediente,⁸ así como el informe que como carta reservada envió el propio Revillagigedo al rey para informarle con fecha de agosto de 1793,⁹ constituyen una suerte de prisma que nos

⁸ AGI, Méx. 1554, f. 2v-3r. En junio de 1791, Ramón de Posada, fiscal de Real Hacienda, argumenta que no tiene elementos para dar juicios. Sin embargo en Florescano/Castillo (1975-76, I: 259-269) se publica un dictamen realizado por Posada respecto a la representación realizada por los comerciantes en diciembre del mismo año; este dictamen tiene fecha de 27 de enero de 1792. *Ibid.*, I: 270-299, también aparece un informe del superintendente de la Real Aduana, Miguel Páez de la Cadena, realizado en fecha posterior (1792) al expediente que analizamos (AGI, Méx. 1554, f. 26r-28v, 6 de julio 1791). El del comerciante veracruzano Thomas Murphy (Veracruz, 20 de julio de 1793, En: *Ibid.*, I: 381-397) coincide con el expediente del AGI, Méx. 1554, f. 157v-167v. En esta publicación también aparece un ensayo apologético sobre el comercio libre sin autor (*ibid.*, I: 300-380), que no se encuentra integrado en el documento que analizamos del AGI. Luis Chávez Orozco también publicó informes de este expediente (Güemes Pacheco *et al.* 1960). Además del informe de Revillagigedo citado en nota 9, incluye los informes del oidor Eusebio Ventura Beleña y del comerciante veracruzano Thomas Murphy.

⁹ El conde de Revillagigedo hace un difuso informe sobre averiguar si hay decadencia en el comercio de aquellos reinos y en caso de haberla, hallar las causas de ellas y sus remedios, México, 30 de agosto de 1793, AGI, Méx. 1554. Este expediente ha sido publicado como "Notable carta reservada del segundo conde de Revillagigedo" (Revillagigedo 1930-31); también en Güemes Pacheco *et al.* (1960: 5-59).

acerca a las diversas facetas del problema. Estas opiniones, en muchas ocasiones encontradas, nos permiten discernir que el establecimiento del libre comercio para la Nueva España rompía el control y el monopolio que había sido ostentado hasta esos momentos por el Real Consulado de la ciudad de México.

Así, primeramente, este ensayo describirá cuáles eran las condiciones que operaban hasta antes del establecimiento del libre comercio; y luego planteará cuáles fueron las modificaciones introducidas. Trataremos de narrar el contexto en el que se desenvolvía la Nueva España en estos momentos, para concluir por una parte sobre cuáles eran los problemas principales que se enfrentaban y de qué manera resultaron afectados los comerciantes del Consulado de la ciudad de México.

2. La transición en la etapa de las flotas

El sistema de flotas y galeones fue establecido para el comercio con América desde época muy temprana, en la década de los sesentas del siglo XVI. Esta regulación respondió sobre todo a la necesidad de protección de las embarcaciones, las que eran constantemente atacadas en la navegación atlántica por piratas y corsarios. De esta manera, se espació el tiempo de salida de los buques desde Sevilla, ya que viajaban en un grupo mínimo de seis navíos, protegidos por barcos de la Armada Real española. Era importante para la Corona, sobre todo, proteger los tesoros que empezaban a arribar a las costas españolas, los que eran codiciados tanto por los franceses, como por los ingleses y holandeses.

Hubo diversas órdenes reales emitidas en los siglos XVI y XVII para establecer la periodicidad de las salidas y el arribo de las flotas de España a América y viceversa. Se definieron claramente dos rutas: la primera a la Nueva España, esto es, arribarían a las Antillas, a Honduras y a Veracruz; y la segunda a Tierra Firme, con rumbo a Cartagena de Indias, Puertobelo y otros puertos de la costa septentrional de América del Sur. Sin embargo, la regularidad anual establecida para los viajes no fue respetada, pues a los comerciantes andaluces les convenía generar escasez de mercancías en América, lo que propiciaba la elevación de los precios. La regularidad de las flotas para la Nueva España entre 1680 y 1716 supuso un promedio de dos años y medio,

al haber arribado a Veracruz en este lapso tan sólo catorce flotas (García Baquero 1988 [1976]: 150).

La legislación establecida para el tránsito marítimo fue escasamente respetada, y de esta manera los buques eran sobrecargados de mercancías de particulares, lo que propiciaba el contrabando, que se sumaba al realizado por los países enemigos, que sentaron reales en todos los puertos de las posesiones americanas. Fue por ello una preocupación eminente de los Borbones, desde su arribo a la Corona española en los inicios del siglo XVIII, atender las cuestiones relativas al comercio con sus posesiones americanas. Así, desde la llegada de Felipe V al trono se creó una Junta del restablecimiento del comercio, con el objetivo de encontrar “el mejor medio para dar más seguro curso a la navegación de las Indias, a fin de conseguir el mayor restablecimiento del comercio con ellas”.¹⁰

Esta junta propugnaba por el establecimiento de compañías de comercio, formadas tanto por extranjeros como por españoles, e inclusive planteaba la libertad de comercio, mediante navíos sueltos desde todos los puertos españoles. Sin embargo, la guerra de Sucesión desvió momentáneamente la atención a menesteres más importantes, y no fue hasta 1720 que se retomó el asunto con más vigor, continuando con lo concerniente a flotas y galeones, estableciendo una clara y definida normatividad, tanto en lo referente a la reglamentación del transporte como en el aspecto de organización administrativa y fiscal. Si bien se trataba de que los buques continuaran saliendo en convoy, sus salidas debían respetar la frecuencia establecida, y evitar los retrasos que se daban por no avituallar los buques con la antelación y rapidez necesarias. La fecha establecida para la salida de los buques de Cádiz con rumbo a la Nueva España era el primero de junio, viajando hasta llegar a Veracruz sin detenerse más que seis días para la aguada, en Puerto Rico. En Veracruz se quedaban hasta el día 15 de abril, fecha fijada para el retorno, con escala de dos semanas en La Habana.

Algunos otros puntos fueron modificados, tales como el permiso para el transporte de mercancías de particulares, la escolta que tenía que estar formada mínimamente por un buque capitán y otro almiran-

¹⁰ Representación del marqués de Casal a la Junta, Madrid, 8 de enero de 1706. En: García Baquero 1988 [1976]: 151.

te, la exigencia de que los buques fueran fabricados en astilleros españoles, de que se diera en los navíos de guerra preferencia al traslado de los efectos de la Real Hacienda, así como en las naves mercantes a los productos del comercio. Los barcos, además, podrían trasladar a los comerciantes para que pudieran ejercer sus empleos, así como a los diversos religiosos que tuvieran como destino América. De hecho, esta legislación repetía en gran medida la establecida anteriormente, aunque hubo algunas modificaciones en el aspecto fiscal.

Respetada escasamente esta ley, se volvió a hacer énfasis en ella con un reglamento emitido en 1725, básicamente en los mismos términos. Se hacía especial hincapié en tener los embarques listos con toda antelación para salir en el tiempo establecido. Lo que nuevamente no fue acatado, manejando los comerciantes gaditanos los tiempos de salida con el fin de obtener mayores ganancias en la venta de sus mercancías.

Debido a las protestas de los comerciantes americanos, la Corona volvió al problema, emitiendo una real cédula en 1735, donde trataba de conciliar los intereses de ambos comercios, basándose fundamentalmente en los reglamentos emitidos previamente. Pero el estallido de la guerra contra Inglaterra en 1739 impidió la salida de la flota, y obligó a abastecer a América por medio de registros sueltos; esto es, buques que navegaban individualmente y podían arribar a sus destinos sin tantos peligros.

Parece ser que con este nuevo método de transporte de la mercancía, el volumen de transacciones comerciales se incrementó; sin embargo, con el costo de la pérdida de control sobre el mercado, tanto por parte de los comerciantes gaditanos como de los almaceneros mexicanos, ya que al suspenderse la feria de Jalapa perdían la estricta vigilancia que ejercían en las operaciones de compra y venta. Por supuesto, por parte de ambos grupos surgió la inconformidad y concluida la guerra con Inglaterra, ejercieron una mayor presión para que se restableciera el sistema flotas. La Corona española respondió a las demandas, y a la mitad del siglo XVIII volvió a convocar a juntas para reorganizar el comercio. Se empezó a instrumentar la formación de compañías comerciales, como un método para incrementar el comer-

cio con América y como un paso intermedio entre el sistema de flotas y el comercio libre (Vázquez de Prada 2000, I: 281-286).¹¹

Seguramente la presión de los comerciantes gaditanos era muy fuerte, pues en 1754, ya con Fernando VI como rey, se restableció el sistema de flotas para la Nueva España, aunque Tierra Firme proseguiría con los registros sueltos. Los puntos más importantes que se normaron para el transporte marítimo de Cádiz a Veracruz fueron que la salida de las flotas tuviera una periodicidad bianual y que el tonelaje a transportar se determinase en función de la demanda. Se establecía que en el ínterin no se enviaran ni ropa ni abarrotes en los navíos de azogue o en los registros sueltos, pero se permitía el transporte de frutos y enjunques.¹² Al igual que en los periodos anteriores, la legislación no fue respetada, y la presión de los comerciantes gaditanos generaba que la periodicidad de salida de las flotas a la Nueva España fuera muy espaciada, saliendo en promedio con un lapso de cada cuatro años. Por otra parte, entre 1756 y 1776, arribaron cuarenta navíos de registro, transportando diversos tipos de mercancías, equivalentes a un total de 22,275 toneladas (García Baquero 1988 [1976]: 161-162).

García Baquero hace énfasis en que, no obstante el fracaso de la legislación establecida para el comercio marítimo, y a pesar de la presión de los grupos de comerciantes, a partir de la guerra con Inglaterra y a la conclusión de ella, se dio un cambio significativo al perder el sistema de flotas su carácter prioritario, siendo mucho más importante la navegación por medio de registros sueltos. Considera que si las flotas fueron restablecidas fue debido, en gran medida, a los argumentos manejados tanto por los comerciantes gaditanos como por los comerciantes mexicanos. Hay que tener presente, que la navegación de los registros sueltos significaba para la Corona un ingreso adicional, al tener los buques que pagar el permiso de traslado. Todo ello fue originando modificaciones profundas en todo el sistema comercial y, por supuesto, en el ámbito particular. Ocasionó alteraciones en el comercio de la Nueva España, aunque parece que éstas no hicieron eclosión

¹¹ Las compañías estaban formadas por acciones y eran concedidas por privilegio real, teniendo el monopolio del comercio en un territorio determinado. Estas compañías tenían estatutos privilegiados y estaban formadas por el propio rey, algunos nobles, altos funcionarios y comerciantes.

¹² Se trataba de hierro o acero utilizado como lastre de los buques que se comerciaba al arribar a Veracruz.

hasta la década de 1780. Para mayor claridad habría que profundizar nuestros conocimientos del comercio novohispano de la primera parte del siglo XVIII y observar las alteraciones que se dieron por el sistema de registros sueltos.

Inclusive hubo quejas de los almaceneros mexicanos en este periodo, cuando seguramente se debilitó el monopolio que ejercían. Ya Real Díaz hablaba de que para mediados del siglo XVIII:

El proceso de anulación, como clase comerciante, de los poderosos almacenistas mexicanos continuó desarrollándose. La mayoría de las compras efectuadas en esta feria [1757-1758] se debieron a los pequeños comerciantes, viandantes, corredores y dueños de tienda de poca monta y nombre (acaso no tienen 2.000 pesos de principal) (Real Díaz/Carrera Stampa s. f.: 112).

Para ello, Real Díaz se basaba en un memorial que los diputados del comercio de México habían escrito, quejándose del atraso en la salida de la flota de Veracruz a Cádiz, lo que permitía que los comerciantes gaditanos tuvieran un tiempo mayor en Jalapa para la realización de sus mercancías, impidiendo que los almacenistas fijaran sus propias condiciones.

Al establecerse el libre comercio, las condiciones acabaron de modificarse radicalmente para los almaceneros de la ciudad de México. Las quejas emitidas por los diputados del comercio en 1758 se anticiparon, como vamos a ver, en un tono muy similar a las de treinta años después; el tema era el mismo: el deterioro comercial existente y la multitud de pequeños comerciantes sin o escaso capital que accedían al mercado. El control monopólico que ejercían los miembros del Consulado de la ciudad de México estaba siendo socavado. Hay que tener presente el planteamiento de Vázquez de Prada (2000, I: 292) con relación al ascenso espectacular de una burguesía periférica. Si bien su estudio se refiere a España, podría hacerse aplicable también a la Nueva España, como fue el caso de los comerciantes de Veracruz y de Guadalajara, que incluso en 1794 fundaron sus propios consulados (Souto Mantecón 2000: 128; Ibarra 2000b: 1-2).

3. El establecimiento del libre comercio y el contexto nacional e internacional

El sistema de navíos de permiso, esto es, buques independientes o registros sueltos, empezó a influir en la política comercial, al notarse

un beneficio tanto para los comerciantes como para el propio Estado. Por un lado, se incrementaron las transacciones mercantiles y, por el otro, la percepción fiscal por este renglón creció significativamente. De esta manera, al concluir la guerra con Inglaterra en 1748, se decidió que este sistema continuara operando, y al ver un incremento de los ingresos por vía de impuestos, se consideró adecuado que este método siguiera funcionando. También influyó el ascenso de Carlos III y el inicio de una política revisionista, que permitió se fueran sentando paulatinamente las bases para el establecimiento del libre comercio.

Es en 1765 cuando se permitió que, además de Cádiz, nueve puertos de la península pudieran establecer relaciones comerciales con las islas de Barlovento, lo que culminó en 1778, cuando se hizo extensiva esta libertad a todos los dominios españoles, a excepción de Venezuela y la Nueva España, que no obtuvieron este privilegio hasta 1789.

Pero ¿en qué consistía esta libertad de comercio? Hasta antes de 1765 había una exagerada presión fiscal que se representaba en la multitud de derechos, tales como el palmeo,¹³ tonelada,¹⁴ extranjería,¹⁵ San Telmo,¹⁶ así como en visitas y reconocimiento de carenas, habilitación, licencias, etc. (García Baquero 1988 [1976]: 184-194). Cancelando el pago de todos estos derechos, se estableció un impuesto del 3% *ad valorem* sobre los productos españoles y de un 7% sobre los extranjeros, manteniéndose el pago de 1720 para productos no sujetos a medición cúbica, tanto de origen nacional como extranjeros (García Baquero 1988 [1976]: 211). En última instancia, como quedó bien

¹³ El derecho de palmeo era un impuesto en función al volumen ocupado en palmos cúbicos por las mercancías, haciendo caso omiso de su valor.

¹⁴ El derecho de toneladas consistía en una imposición de real y medio de plata con que se gravaba cada tonelada de carga de todos los navíos que partiesen de Sevilla, Cádiz y las islas Canarias con dirección a las colonias. Su importe estaba destinado al sostenimiento de la cofradía o corporación de marineros que ejercían su oficio en la Carrera de Indias. El 2º de los derechos de toneladas correspondía a la Corona y se trataba de una cantidad fija por tonelada de carga, que se cobraba a todos los navíos a los que se les concediese licencia para navegar en calidad de registros sueltos.

¹⁵ El derecho de extranjería consistía en un gravamen de 66 reales de vellón (tres ducados de plata) por cada tonelada de carga, aplicado a todas las embarcaciones extranjeras que, a falta de nacionales, se fletaban para la navegación atlántica.

¹⁶ El derecho de San Telmo se aplicaba a la escuela de navegación establecida en Sevilla, conocida con el nombre de Seminario de San Telmo.

claro, el objetivo de la metrópoli era la protección y fomento de sus producciones, recargando de una manera más onerosa a los productos extranjeros. Trató de simplificar los trámites y, según decía, reducir la carga de derechos que incrementaban mucho el precio de la mercancía, lo que permitiría que el comercio se agilizase. Sin embargo, los productos coloniales mantenían inalterables la misma paga de derechos a la entrada de los puertos españoles, aunque esto fue subsanado con el reglamento de 1778 y, de acuerdo con Delgado Ribas (1995: 523-524), “ello no es óbice para considerar la política arancelaria aplicada desde 1778 como el resultado mejor logrado en tres siglos de intervencionismo estatal sobre el comercio colonial”. A raíz de precorizar el libre comercio en todas las posesiones americanas, salvo Nueva España y Venezuela, la presión fiscal sobre el comercio marítimo se incrementó y se dio una mayor permisividad en la exportación de manufacturas extranjeras, al obtener mayores recursos fiscales de una manera fácil.

Toda esta política reformista fue avalada, en gran medida, con el nombramiento de José de Gálvez como ministro de Indias. Su política, junto con la de Floridablanca en la Secretaría de Estado, iba encaminada más que nada a la obtención de mayores recursos para la Corona, para poder sostener los gastos militares que iban *in crescendo*.

Aunado a ello, se empezó a observar, a partir de 1778, un descenso en el precio de los géneros que de España se llevaban a Indias, lo que condujo a una grave crisis en el comercio gaditano, que afectó, aunque en menor medida, también a las producciones catalanas. Los puertos ligados al comercio con España fueron favorecidos con las nuevas maneras de ejercer los negocios, pero ello llevaba también a la ruptura de mecanismos tales como el control que hasta entonces había ejercido el Consulado de comerciantes de la ciudad de México. No se afirma que el libre comercio fuera, en exclusiva, el responsable del decaimiento de los comerciantes de la ciudad de México y de su institución consular: una serie de medidas diversas, tales como el establecimiento de las intendencias y la abolición del repartimiento de mercancía, hicieron lo suyo en cuanto al comercio interno. La constitución del estanco del tabaco, el incremento de la presión fiscal en todos los ámbitos aplicados a los diversos estratos de población, la baja del poder adquisitivo, las migraciones en búsqueda de mejores condiciones de vida, las continuas y elevadas extracciones de plata que requie-

ría constantemente la Corona, llevaron en conjunto a que la situación novohispana en las últimas décadas del siglo XVIII sufriera una serie de modificaciones y fuera profundamente inestable. Si a ello sumamos la grave crisis por la escasez de maíz en 1785 y 1786, donde la gente se empobreció aún más, se determina que la perspectiva del virreinato de la Nueva España en este periodo sea vista como una etapa de precariedad.

En el panorama internacional la situación tampoco era sólida. La segunda mitad del siglo XVIII estuvo llena de conflictos internacionales. La guerra que en 1762 sostuvo España contra Inglaterra y la toma de La Habana y Manila propiciaron la militarización en España y sus colonias. Sobrevino la expulsión de los jesuitas, tanto en la península como en sus colonias, y poco tiempo después, en 1775, la sublevación de las colonias norteamericanas contra Inglaterra; el apoyo concedido a éstas por Francia (1778) y el papel de España como mediador, entrando finalmente en la guerra contra Inglaterra en virtud del pacto de familia (1779), la conclusión de esta guerra en 1783 con la Paz de Versalles; y menos de una década después, en 1789, el estallido de la Revolución Francesa, la alianza de España con Inglaterra para defenderse de Francia (1793) y la paz de Basilea en 1795, que puso fin a la guerra franco-española; los nuevos incidentes contra Inglaterra, que iniciaron un nuevo enfrentamiento (1796) hasta la paz de Amiens (1802), aunque a pesar de ello los actos de piratería inglesa continuaron y volvió a estallar la guerra en 1804, para que en 1807 España fuera invadida por Napoleón y sus tropas.

Ante dicho panorama, es claro que el fomento al comercio internacional era una manera más de allegarse recursos, de los que España se encontraba tan necesitada para poder sostener los continuos gastos militares que tenía que enfrentar. El reclutamiento de hombres y armas se daba no solamente en España, sino en sus diversas posesiones.

Se puede concluir que las modificaciones sufridas en la Nueva España a causa del desarrollo europeo no se iniciaron propiamente en 1789. Fue un largo transcurso a través del siglo XVIII en el que se dieron los cambios, por un lado en las imposiciones fiscales del transporte marítimo y por otro en los sucesivos cambios de método de flotas a registros sueltos, para retornar nuevamente al sistema de flotas, que —no en exclusiva— era perturbado por embarcaciones sueltas o por los navíos de azogues o de correos. Inclusive, a partir de 1778, fecha

de arribo de la última flota a Veracruz, hasta 1789 en que se preconiza el libre comercio para la Nueva España, el comercio ultramarino arribó por medio de buques individuales.

De esta manera, la queja de los almaceneros de la ciudad de México tenía raíces previas, y su comercio monopolístico había iniciado su desintegración. Con base tanto en la evaluación que realizaron algunos de los miembros del Consulado de la ciudad de México, como en la opinión de algunos funcionarios y la diversa perspectiva de los comerciantes de Veracruz en el periodo comprendido entre 1791 y 1793, trataremos de detectar los principales problemas desde dos puntos de vista:

Primero, el de los problemas que se presentaban en el comercio ultramarino a causa de los nuevos sistemas; y segundo, los problemas que enfrentaban directamente los comerciantes monopolistas de la ciudad de México, al ir perdiendo el control de las importaciones europeas y con ello la exclusividad del manejo mercantil en todo el territorio. A lo anterior se sumaba la pérdida de fortaleza del Consulado de la ciudad de México, que inició su decaimiento desde que le fue retirado el encabezamiento de alcabalas a partir del primero de enero de 1754 y se agudizó por las diversas medidas instrumentadas para el libre comercio, debilitando a sus matriculados.

4. Problemas y conflictos con el sistema del libre comercio

Como hemos visto anteriormente, fueron doce los miembros del Consulado de la ciudad de México a los que, por orden del virrey Revillagigedo, se les pidió su parecer sobre la situación y las perspectivas futuras del comercio novohispano. Seguramente fueron seleccionados por distinguirse por su amplio manejo comercial y por la posesión de un significativo capital. Cinco de ellos (Basoco, Agreda, Yraeta, Yermo y García Herreros) no estuvieron en la lista de 115 firmantes de la representación sobre el comercio que hicieron al prior y cónsules del Real Tribunal del Consulado (Florescano/Castillo 1975-76, I: 250-251), pero esto no significa que no hayan sido miembros matriculados de la corporación y que por causas diversas no hayan podido firmar. Los comerciantes restantes aparecen en el siguiente cuadro como matriculados. Las respuestas que dieron al interrogatorio no fueron

homogéneas y nos muestran diferentes puntos de vista, aunque la mayoría coincidieron en solicitar el retorno al antiguo sistema de flotas. También con respecto a los funcionarios entrevistados, algunos de ellos están totalmente en contra del libre comercio, abogando por retornar al antiguo sistema de flotas. Este es el caso del superintendente de la Real Aduana, Miguel Páez de la Cadena, que seguramente tenía intereses conjuntos con los comerciantes y el Consulado de la ciudad de México y el de Pedro María de Monterde, contador del Tribunal de Cuentas, que consideraba un gran decaimiento en el comercio. Sin embargo otros le veían grandes ventajas al sistema, aunque no dudaron en hacer críticas a lo que consideraban se podía mejorar. Este es el caso del oidor Eusebio Bentura Beleña y del fiscal Ramón de Posada, así como del fiscal de lo Civil, Lorenzo Hernández de Alva y del ministro contador de Cajas Reales de Veracruz, Juan Matías de Lacunza. La pregunta fundamental realizada por Revillagigedo era la de si había decadencia en el comercio. En caso de una respuesta afirmativa, se solicitaba propusieran los remedios oportunos para su solución.¹⁷ ¿Quiénes eran los individuos que aportaron su opinión en este expediente? En el cuadro siguiente aparecen sus nombres y oficios, aunque algunos de ellos evadieron respuesta al argumentar enfermedad, exceso de trabajo o que habían dado su opinión con anterioridad. Fueron dos los momentos de realizar la investigación, ya que Revillagigedo, inconforme con todas las respuestas obtenidas, decidió ampliar la averiguación. Las respuestas del primer momento corresponden al año de 1791, y los nuevos entrevistados dieron su respuesta en 1793:

¹⁷ Todo este apartado está basado fundamentalmente en: Testimonio del expediente sobre averiguar si hay o no decadencia en el comercio y sobre hallar remedio de ella en caso de haberla, y proporcionar los auxilios más convenientes para fomento del tráfico mercantil de este reino, AGI, Méx. 1554. Al final de este ensayo se presenta los términos en que está estructurado el documento.

Cuadro 1: Personas a las que por orden del virrey se les pidió su parecer sobre la situación del comercio, 1791

Nombre	Función
Antonio de Basoco	Comerciante, ciudad de México
Juan Fernando Meoqui	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Ramón de Goicochea	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Lorenzo de Ángulo Guardamino	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Juan Antonio Yermo	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Isidro Antonio de Icaza	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Ramón de Posada	Fiscal de Real Hacienda, ciudad de México
Miguel Páez de la Cadena	Superintendente de la Aduana, ciudad de México
Diego de Agreda	Comerciante, ciudad de México
Gaspar Martín Vicario	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Pedro Ángel Puyade	Comerciante, ciudad de México
Manuel García Herreros	Comerciante, ciudad de México
Vicente Francisco Vidal	Comerciante, ciudad de México, matriculado
Francisco Ignacio de Iraeta	Comerciante, ciudad de México
Eusebio Bentura Beleña	Oidor de la Real Audiencia, ciudad de México
Lorenzo Hernández de Alva	Fiscal de lo Civil, ciudad de México

Cuadro 2: Personas a las que por orden del virrey se les pidió su parecer sobre la situación del comercio, 1793

Nombre	Función
Juan Navarro	Director de Alcabalas, ciudad de México
Juan Matías de Lacunza	Ministro contador de las Cajas Reales en Veracruz
Thomas Murphy	Comerciante veracruzano
Pedro María Monterde	Ministro del Tribunal de Cuentas, ciudad de México
José Ignacio Uriarte	Comerciante, Veracruz, factor de los 5 Gremios

De esta manera, encontramos un mayor balance en el amplio abanico de respuestas, ya que no cabe duda que en el primer momento las respuestas se encontraban sesgadas fundamentalmente a los miembros del Consulado de comerciantes de la ciudad de México.

En el análisis del material correspondiente a los almacenistas, *grosso modo*, se observan dos diferencias. La primera es que dos de los doce entrevistados (Iraeta e Icaza) se encontraban totalmente a

favor del libre comercio, y otro de ellos, Diego de Agreda, aunque sin mucho convencimiento, veía el sistema con cierta simpatía. La segunda diferencia consiste en el tiempo que estos individuos llevaban en el ejercicio de comerciantes, sintiéndose más agredidos por el nuevo sistema los que tenían más tiempo en el negocio mercantil. Estos decidieron abstraerse del comercio probablemente sólo de palabra e invertir sus capitales en otros ramos, tales como los préstamos particulares con intereses, la minería o la agricultura. Asimismo, podemos citar dos comerciantes de los que tenemos más conocimiento, quienes no obstante la gravedad de sus quejas, continuaron en el comercio aunque en menor escala, si bien invirtiendo capital en otros menesteres. Tales serían los casos de Antonio de Basoco y Gaspar Martín Vicario; el primero de ellos otorgando créditos particulares y dedicado también al abasto de carne de la ciudad de México; y ambos adquiriendo acciones en la minería, concretamente en la gran empresa de Vetagrande, en Zacatecas, pero continuando al mismo tiempo en los negocios mercantiles.

Iraeta, Icaza y Agreda, no obstante ver con más simpatía el nuevo sistema comercial, mencionaron ciertos problemas. Por su parte, Agreda recomendaba asignarles tiempos de salida a los buques, además de limitarlos para que no se inundara el mercado novohispano de mercancía. También criticaba los excesivos impuestos que se pagaban desde que la mercancía salía de la península hasta su embarque hacia la capital del virreinato, lo que incrementaba en gran medida el costo de los productos, y finalmente censuraba la continua extracción de plata hacia España, lo que no permitía una mayor circulación de moneda en la Nueva España. Pero estos tres problemas, que podemos decir que eran centrales, no fueron aludidos solamente por Diego de Agreda, sino que fueron señalados con constancia por la mayoría de los informantes.

Francisco Ignacio de Iraeta, por su parte, si bien consideraba que el sistema del libre comercio impuesto proporcionaba una mayor equidad a las provincias españolas, también resaltaba que la nueva normatividad adolecía de graves problemas, pues todavía no se sabía manejar. Alude a los descalabros mercantiles padecidos en Cádiz y consideraba que la Nueva España también sufría de decadencia. El establecimiento de guías de traslado de las mercancías lo consideraba un gran obstáculo, pues éstas sólo permitían tres destinos, mientras

que anteriormente se llevaban los efectos adonde fuera conveniente. El cobro de alcabalas había dificultado las ventas, y ya no era posible dar a consignación como se hacía anteriormente, lo que provocaba atrasos en las negociaciones. Su opinión era que el gobierno tenía la obligación de favorecer a los comerciantes de la capital al haber contribuido éstos con préstamos constantes a la Corona. Y también hacía hincapié en el exagerado cobro de derechos, lo que llevaba a incrementar en gran medida el costo de la mercancía y por consecuencia el precio de venta. Iraeta ejemplificaba el cobro de derechos, señalando que si en Cádiz el género extranjero pagaba el 7% y el nacional el 3%, en las sucesivas etapas del viaje se iba recargando, y como se observa en el cuadro siguiente el consumidor llegaba a pagar entre un 27% y un 35% más del valor de la mercancía.

Cuadro 3: Derechos cobrados a las mercancías importadas a la Nueva España

Género extranjero		Género nacional (español o americano)	
Cádiz:	7%	Cádiz:	3%
Veracruz:	12%	Veracruz:	8%
Ciudad de México:	8%	Ciudad de México:	8%
Llevado a otra parte:	8%	Llevado a otra parte:	8%

⇒ El consumidor paga el 35% más

⇒ El consumidor paga el 27% más

Este panorama tan claro que muestra Iraeta, es plenamente coincidente con la ansiedad del gobierno español por obtener más recursos mediante cualquier medio, pero también nos permite ver de qué manera la mercancía se iba encareciendo y que en el camino no solamente se beneficiaba la Corona, sino también lo hacían los propios comerciantes.

Por su parte, Isidro Antonio de Icaza reflexionaba que los antiguos comerciantes se habían retirado de estos negocios por arribar mercancías en exceso, lo que habría propiciado el abaratamiento, en ocasiones desmesurado, de los géneros, lo que no permitía ganancias. Opinaba que había que actuar con mucho tiento, y como los comerciantes más acaudalados se habían retirado, ahora el comercio se encontraba en manos de principiantes que tenían poco o nada que perder. Si bien

él había continuado en el negocio del comercio, también había ido diversificándose y enfocando sus miras al comercio de América del Sur. De esta manera realizó transacciones en Panamá, Perú y Chile de producciones novohispanas e incluso de géneros europeos. El también abogó por la simplificación de los trámites administrativos, tales como el marchamo, las guías y la rebaja de la alcabala y la promoción del comercio por medio de ferias, como la de San Juan de los Lagos.

El resto de comerciantes miembros del Consulado de la ciudad de México estaba totalmente en contra del establecimiento del libre comercio y se mostró pesimista al respecto, considerando que su implantación no solamente los llevaba a ellos a la ruina, sino también al virreinato de la Nueva España. Los puntos que destacan en sus opiniones son los siguientes:

Había una queja generalizada de que el comercio se había extendido a muchas manos, lo que impedía que se tuvieran ganancias razonables. Por otra parte, el arribo indiscriminado de buques había permitido que hubiera un exceso de mercancías, es decir una oferta muy abundante, lo que había propiciado una baja en el precio de los productos, lo que generaba grandes pérdidas en las inversiones. La opinión de todos ellos era que el establecimiento del libre comercio había llevado a la decadencia y que era exagerado el cobro de derechos.

Los comerciantes ejemplificaban las situaciones y así tenemos que Gaspar Martín Vicario mostró de qué manera se habían incrementado los derechos. De acuerdo a esto, un tercio o cajón de doce palmos con el reglamento de 1720 pagaba de derechos 9 pesos 2 reales, y con el reglamento de 1778 el mismo tercio o cajón cuyo valor era de 350 pesos, pagaba por el impuesto *ad valorem* el 7% que son 24 pesos 4 reales, más el 7% de almojarifazgo en Veracruz, más el 5% de alcabala, lo que significaba una erogación total de 71 pesos 4 reales, es decir, un incremento de 62 pesos 2 reales con referencia al impuesto de palmeo de 1720.

Jalando agua para su molino, los comerciantes protestaban que las alcabalas no estuvieran arrendadas, lo que significaba abusos por parte de los funcionarios administradores que querían cobrar más. Por supuesto, lo que trataban era que la administración de alcabalas volviera a caer en manos del Consulado, como había sucedido en la primera mitad del siglo XVIII, lo que desde todos los aspectos les proporcionaba muchas ventajas.

Otra queja constante era que la distribución de la mercancía se realizara en el puerto de Veracruz. Decían que el almacenamiento en el puerto provocaba el deterioro y descomposición de los géneros y mercancías, pues éstos se picaban y manchaban o se descomponían. Se señalaba que con el sistema anterior mucha mercancía ya venía vendida desde Cádiz por lo que se entregaba a sus destinatarios y era una menor proporción la que se distribuía en la feria de Jalapa, lo que permitía en cuanto a la recaudación del dinero que éste retornara con mayor brevedad tanto a los comerciantes como a los fabricantes en España.

Se recomendaba también que se hiciera un cálculo del tonelaje de los barcos, y que éstos arribaran solamente en función de la demanda de la colonia. Pues si bien los barcos de las flotas tenían de calado entre 800 y 1.000 toneladas, y los navíos de registro lo tenían menor (250 a 400 toneladas), estos últimos arribaban en mucho mayor número, lo que había propiciado una excesiva oferta. Se abogaba por la regularidad en la salida de los barcos, lo que permitiría que no se inundara el mercado de productos.

Algunos de estos comerciantes estaban totalmente a favor de la política proteccionista que defendía sobre todo la industria española y favorecía el comercio de España con las colonias, criticando inclusive el comercio extranjero, que impedía el desarrollo de la industria y comercio de la metrópoli.

Una queja universal de estos comerciantes era que no lograban obtener cuando menos una utilidad de un 5% al año, no obstante haber invertido capital y realizar las diligencias necesarias.

Por supuesto sus peticiones se encaminaban a retornar al antiguo sistema de flotas, con un tonelaje restringido, con periodicidad que variaba de uno a tres años, y con la baja de derechos o inclusive retornar al antiguo sistema fiscal.

Al respecto, el comerciante Juan Fernando de Meoqui decía:

No es menos sabido que los vecinos de México, tanto por su gran número como por la opulencia de sus caudales, compraban mucha parte surtiendo sus almacenes para el giro de dos o tres años, que computaban de nuevo para su expendio, hasta la llegada de otra nueva expedición. De aquí resultaba que los mercaderes de tierra adentro, que por lo común sólo pueden comprar por junto una corta provisión, ocurrían después a esta capital con el fin de habilitar sus nuevos surtimientos, que regularmente proporcionaban en la mayor parte al fiado, con lo que se hacía un giro

más activo de que todos participaban proporcionalmente, y se sostenían las mercaderías guardando un precio relativo a su origen, que producía a los unos el premio de sus caudales y a los otros el fruto de su trabajo, pero todo este bello orden le vemos ya trastornado [...].¹⁸

Consideraban que el antiguo sistema de flotas beneficiaba tanto a los fabricantes como a los comerciantes y comisionistas, tanto españoles como americanos, e inclusive a los consumidores, situación que no se presentaba con el comercio libre. En el antiguo sistema la negociación con los comerciantes extranjeros era más favorable, ya que abarataban sus géneros con tal de vender, mientras que con el actual sistema los extranjeros ya no tenían rezagos de géneros, ni la necesidad de venderlos a los españoles a precios más bajos.

No toda la mercancía se comportaba de la misma manera. Algunos renglones comerciales habían sufrido más detrimento que otros, como fue el caso de la lencería que era de origen extranjero o los lienzos, que se encontraban con precios muy elevados.

Los comerciantes ya no compraban mercancía en abundancia como lo hacían anteriormente, por el miedo que tenían de que los diversos productos arribaran a la Nueva España con precios más bajos, y entonces sufrieran ostensibles pérdidas al no poder vender en el precio justo.

Y volviendo a hacer hincapié en la queja común relativa a la abundancia en las extracciones de moneda, lo que impedía una libre circulación en la Nueva España, y la necesidad de poner atención a este problema reglamentando en tiempo y cantidades los envíos a la península, uno de los comerciantes, Ramón de Goicochea, concluía a este respecto en su informe de la siguiente manera:

Las cosas no se derivan tanto de su baratura, cuanto de la abundancia, circulación y giro del dinero, en un real de minas en auge tanto los pobres como los ricos compran toda la mercancía que se vende cara.¹⁹

En alguno de los informes se hacía un cómputo aproximado de que la mercancía europea estaba integrada por cuatro quintas partes de géneros producidos fuera de España y una quinta parte de géneros de la metrópoli. Lo que indica claramente de qué manera la balanza era desfavorable para el comercio español.

¹⁸ AGI, Méx. 1554, f. 50v.

¹⁹ *Ibid.*, f. 107v.

En términos generales, estos fueron los problemas principales que observaban los comerciantes con relación al establecimiento del libre comercio. Resalta, desde luego, que, si bien no expresada abiertamente, existió la queja generalizada de los comerciantes de la ciudad de México de sentir que se les escapaba de las manos el circuito comercial ultramarino; si a ello le sumamos las críticas que José de Gálvez y su camarilla realizaron al repartimiento de diversas mercancías y su posterior prohibición en una gran mayoría de poblaciones novohispanas, se les fueron cerrando otros circuitos comerciales internos que también manejaban. En general, las críticas de los comerciantes fueron coincidentes, aunque expresada cada una desde su particular punto de vista y exponiendo en ocasiones los problemas específicos que enfrentaban. La solución que planteaban era retornar al antiguo sistema de flotas, pues de esta manera consideraban podrían volver a controlar la situación, al adquirir con el capital que poseían todas las mercancías que arribaran y proporcionar a los comerciantes menores las facilidades y créditos para que estas mercancías arribaran a distintos puntos del territorio.

El oidor Eusebio Bentura Beleña, claro entendedor de la problemática, nos describe los términos de cómo operaba el antiguo sistema y los términos de ejecución del libre comercio:

El método de flotas, limitando los consumos y encareciendo por consiguiente los precios, proporcionaba ganancias exorbitantes a una sola clase en perjuicio de las demás. Esta sola clase eran los comerciantes acaudalados de México, porque casi únicamente ellos compraban toda su carga, no siéndoles fácil a otros ir a Jalapa, mantenerse allí el largo tiempo de la feria, ni en ésta hacer sus vastas negociaciones, que comúnmente ninguna bajaba de cien mil pesos y muchas ascendían a medio millón, un millón, dos o más millones, en tal conformidad que algunas flotas (cuyo total valor era diez y seis a veinte millones de pesos) solían levantarse por diez, doce o veinte comerciantes ricos.

Regularmente eran éstos los mismos a quienes venían consignados desde España, navegados de su cuenta y riesgo, o comprados con sus caudales casi todos los efectos que se mandaban retener en Veracruz o Jalapa hasta verificado el regreso de las flotas o poco tiempo antes para darlo a los flotistas vendiesen los suyos con anticipación: de modo que por estos dos medios venía a parar y estancarse en los comerciantes ricos de México casi toda o toda la carga de las flotas. Sucediendo en muchos que cada dos o tres de éstos para más limitar en ellos el estanco de alguno o algunos renglones como la lencería, el hierro u otros, confabulaban a comprarlo por entero, a fin de hacer luego el monopolio de venderlos a su absoluto arbitrio.

Consiguientemente lo era que todos los demás ocurrieren a sus almacenes para surtirse de cuanto necesitaban, imponiéndoles la dura ley de recibir sus memorias de efectos a los precios que querían ponerles, sobrecargando en estos cuando menos a los comerciantes foráneos el tres, cuatro o cinco por ciento de comisión, el seis de alcabala a su introducción en esta capital [la ciudad de México], y lo respectivo a indemnizarse de sus costosos viajes a Jalapa.

Y como ahora lo hacen allí o a Veracruz aun los pocos acaudalados a comprar por sí mismos, cuanto respectivamente necesitan para su giro, sin más detención acaso que la de dos o tres días, consiguiendo de este modo los comerciantes foráneos llevar brevemente y en derecho a sus casas los efectos, libertarse de pagar la alcabala que aquí se les cargaba y no contribuir a los comerciantes ricos de México con sus antiguas exorbitantes ganancias, subdividiéndose éstas en los muchos comerciantes que hay en todo reino y en bastantes de esta capital, que así mismo van a hacer sus negociaciones personalmente, girando sin dependencia de nadie con cuyo motivo otro de los buenos efectos que ha producido el comercio libre es notorio hay aquí ahora duplicado y aun triplicado número de almacenes y tiendas de mercaderías [...].²⁰

Esta precisa descripción nos muestra claramente cuál era el sistema comercial que defendían tanto los mercaderes de la ciudad de México, así como por qué se sentían agredidos y en camino a la ruina. Efectivamente, el quitar a un grupo tan poderoso como lo había sido el de los comerciantes almaceneros de la ciudad de México el control del comercio ultramarino, lo debilitaba en buena medida.

Tendríamos que preguntarnos que pasó con las exportaciones de materias primas que controlaban, pues por la falta de noticias en el expediente, al parecer no fueron afectadas, e inclusive un envío más continuado de estos productos a España seguramente los favoreció. Tales eran la grana cochinilla, la granilla, el algodón, el palo de tinte, la pimienta de tabasco, la vainilla, etc.

Pero la implantación del libre comercio no solamente afectó a esta clase de comerciantes acaudalados y a su Consulado, sino que acarreó consigo algunos problemas para los habitantes de la Nueva España. La escasez de moneda circulante fue notoria en esta última época, pues la extracción de dinero se vio notoriamente incrementada tanto en la fiscalización que realizaba la Real Hacienda y enviaba a la Corona española, como en el pago realizado por los comerciantes particulares a los comerciantes españoles en la adquisición de más mercancías. También fue la época en que la metrópoli solicitaba recursos constan-

²⁰ *Ibid.*, f. 80r-81r.

tes por cualquier vía, fuera por préstamo, donativo o impuesto especial (Marichal 1999: 283). La extracción de la plata era constante e impedía un giro adecuado de la moneda, lo que ocasionaba parálisis tanto en los diversos negocios como en los aspectos mercantiles, fomentando el desempleo y desocupación en la población de escasos recursos. Paralelamente parece ser que el comercio interior había sufrido una fuerte recaída con la suspensión del repartimiento de mercancías en los pueblos, y al no tener la población los recursos necesarios por una grave escasez en la circulación de moneda y al haberse suspendido los créditos a la población de escasos bienes, el comercio se paralizaba.

Respecto a los beneficios que el libre comercio había traído, parece ser que la utilidad del comercio se distribuía de una manera más amplia, en lugar de quedar en manos de un pequeño grupo acaudalado, que los fletes marítimos habían bajado con la mayor concurrencia de navíos y que inclusive las compañías de seguros bajaron el cobro de sus primas. Al haber una mayor competencia, por supuesto, los precios de las mercancías eran más equitativos y se había generado una mayor actividad, tanto en la navegación como en el comercio, que permitía ganancias, aunque muy moderadas.

Finalmente, aunque algunos de los funcionarios como los comerciantes veracruzanos, hacían una severa crítica al Consulado de comerciantes de la ciudad de México al provocar quiebras maliciosas y permitir en muchos casos la impunidad, los juicios morosos y costosos, así como por el nulo papel jugado por sus testaferros, el prior y los cónsules, que se dejaban guiar exclusivamente por sus tres asesores letrados. Destacaban también el pobre papel que había jugado el Consulado en el mantenimiento o apertura de caminos, y se indicaba que el impuesto de la avería que tenía ese objetivo nunca había sido usado con ese fin y no se conocía en qué se había empleado. La utilización de recursos en la construcción de caminos permitiría una mayor agilización al comercio. El debilitamiento relativo de este sector comercial y de su institución representante favoreció el surgimiento, como dice Vázquez de Prada (2000, I: 292), de burguesías periféricas que se fueron organizando y con la ayuda de una política favorable, permitieron el establecimiento de nuevas corporaciones comerciales que, sin embargo, por otras circunstancias, no tuvieron una larga vida.

5. Conclusiones

Hasta aquí hemos visto cómo los cambios y modificaciones sufridas específicamente en el comercio trasatlántico que mantenía la Nueva España con la metrópoli se fueron instaurando paulatinamente durante el siglo XVIII, al sustituirse el sistema de flotas establecido desde el siglo XVI por el envío y retorno de mercancías por medio de navíos de registro. Si bien los comerciantes gaditanos y los almaceneros, establecidos en la capital del virreinato de la Nueva España, ejercieron mucha presión para modificar el método de navíos sueltos, que se había establecido por la guerra contra Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII, lograron se volviera a establecer el sistema de flotas. Sin embargo, en este intermedio, tanto los navíos de registro como los navíos de azogue trasladaban mercancías, lo que les significaba a los comerciantes alteraciones en el mercado que ellos controlaban.

El arribo de Carlos III al trono de España y la política revisionista que siguió en diversos aspectos con sus ministros, fueron haciendo más consistentes los cambios en la política comercial, aunque hay que reconocer la influencia que ejercieron los economistas de la primera mitad del XVIII, que aconsejaban el fomento a la industria y comercio españoles. Estas condiciones modificaron radicalmente la concepción que se tenía del comercio, y concretamente para la Nueva España hubo cambios significativos desde que se suspendió el sistema de flotas en 1776, lo que obligó a que el abasto de mercancía europea y el retorno de las materias primas de la colonia novohispana se hicieran en buques individuales. Como de esta manera no se sabía la fecha exacta de arribo de los buques, los comerciantes del Consulado de la ciudad de México fueron perdiendo el control que tenían sobre la adquisición de la mercancía; a lo cual se sumaron una serie de factores que, como hemos visto, influyeron para que las inversiones realizadas se consideraran de alto riesgo, pues el arribo de la misma mercancía tal vez a un precio diferente, hacía que peligrara el mercado al saturarse y abaratar los precios.

Así, la fecha de 1789, en que se otorgó a la Nueva España la libertad de comercio, es meramente nominal, pues el sistema de registros sueltos ya funcionaba con anterioridad. El Consulado de comerciantes de la ciudad de México había sido golpeado desde que le habían retirado el encabezamiento de alcabalas. Las condiciones internas del

virreinato, así como las sucesivas guerras que vivió España tuvieron también una gran influencia para este comercio: por ejemplo, los buques "neutrales" lograron enormes beneficios.

Pero aquí se ha tratado de observar con más detenimiento la protesta generada por los propios comerciantes del Consulado de la ciudad de México, que ya tenían tiempo de sentir que se les iba arrebatando el control del mercado trasatlántico, lo que sumado a otra serie de modificaciones sufridas en el virreinato de la Nueva España a raíz de la visita de Gálvez, llevaba a que este grupo y su institución representante fuera perdiendo poder político y económico. Por supuesto, tanto el Consulado como sus integrantes continuaron dando la lucha, y así los vemos actuar en los albores de la guerra insurgente y durante ella, aportando ideas, recursos y hombres.

Documentos Consultados

Sobre averiguar si hay o no decadencia en el comercio, hallar el remedio en caso de haberla y proporcionar los auxilios más convenientes para fundamento del tráfico mercantil en este reino. El Tribunal del Consulado solicitando de baja en la alcabala y otras providencias que reparen la decadencia del comercio. Informe reservado del oidor de la Audiencia de México, Eusebio Bentura Beleña, al virrey de Nueva España, conde de Revillagigedo, sobre el actual estado del comercio del reino, 1791-1792, México y Veracruz, AGNM, Cons. 123, exp. 1.

Informe del Consulado de México sobre el comercio libre, México, 31 de mayo de 1788, MNM, ms. 569, doc. 9.

Testimonio del expediente formado sobre averiguar si hay o no decadencia en el comercio y sobre hallar remedio de ella en caso de haberla, y proporcionar los auxilios más convenientes para fomento del tráfico mercantil de este reino, 168 fojas [anverso y reverso], AGI, Méx. 1554.

Estructura del expediente:

- f. 1r: Decreto del conde de Revillagigedo, 16 de junio de 1791.
- f. 1r-2r: Minuta del conde de Revillagigedo, 17 de junio de 1793 [*sic*].
- f. 2v-3r: Oficio de Ramón de Posada, 18 de junio de 1791 (argumenta no tiene elementos para poder dar juicios).
- f. 3r-4r: Respuesta de Juan Antonio Yermo, 19 de julio de 1791 (señala que ya dio respuesta desde 1788, en unión de otros siete comerciantes).

- f. 4r-5r: Respuesta de Vicente Francisco Vidal, 25 de junio de 1791 (otro de los ocho designados para dar respuesta en 1788. Responde que hay decadencia en el comercio).
- f. 5r-15v: Respuesta de Gaspar Martín Vicario, 25 de junio de 1791 (comercio en decadencia).
- f. 15v-21r: Respuesta de Francisco Ignacio de Iraeta, 1º de julio de 1791 (defensor del libre comercio, solicita baja de derechos).
- f. 21r-26r: Respuesta de Isidro Antonio de Icaza, 4 de julio de 1791 (a favor del libre comercio, pero con métodos mejores que el actual).
- f. 26r-28v: Respuesta de Miguel Páez de la Cadena, superintendente de la Real Aduana, 6 de julio de 1791 (el comercio en decaimiento).
- f. 28v-37v: Respuesta de Manuel García Herreros, 8 de julio de 1791 (comercio libre ha dado pérdidas y atrasos).
- f. 37v-41v: Respuesta de Lorenzo de Angulo Guardamino, 12 de julio de 1791 (decadencia del comercio).
- f. 41v-48v: Respuesta de Diego de Agreda, 12 de julio de 1791 (conviene el libre comercio pero modificado en los términos actuales).
- f. 48v-52v: Respuesta de Juan Fernando de Meoqui, 14 de julio de 1791 (el comercio camina a su ruina a pasos agigantados).
- f. 52v-59r: Respuesta de Antonio de Basoco, 22 de julio de 1791 (el reino antes florecía y eran mayores los consumos y más cómodos los precios).
- f. 59r-94v: Informe del oidor Eusebio Bentura Beleña, 24 de agosto de 1791 (la Real Hacienda floreciente en la actualidad).
- f. 94v-102r: Respuesta de Angel Puyade, s. f. (plantea decadencia en el tráfico mercantil).
- f. 102r-117v: Respuesta de Ramón de Goicochea, 6 de septiembre de 1791 (el comercio se halla en estado de decadencia).
- f. 117v-122v: Respuesta de Lorenzo Hernández de Alva, fiscal de lo Civil, 31 de mayo de 1792 (en 18 de junio de 1791 recibe la orden. Liga el informe con los repartimientos. Está a favor del libre comercio).
- f. 122v-128r: Informe de Lorenzo Hernández de Alva sobre los repartimientos, 11 de mayo de 1792.
- f. 128v-131r: El virrey conde de Revillagigedo escribe al rey indicándole el estado del expediente, 30 de junio de 1792 (decide incluir más informes).
- f. 131r-132r: Real orden de Diego Gardoqui al virrey de Nueva España, San Lorenzo, 23 de noviembre de 1792.
- f. 132r-133v: El conde de Revillagigedo a Diego Gardoqui, 28 de febrero de 1793 (acuse de recibo de real orden y contestación a sus cartas).

- f. 133v: El conde de Revillagigedo a Diego Gardoqui, 28 de febrero de 1793 (habla sobre el expediente que inició en 1779 sobre mutuo comercio entre Veracruz y La Habana).
- f. 133v-135r: Minuta y decreto para el interrogatorio a nuevos informantes, tanto funcionarios del gobierno como dos comerciantes de Veracruz, 16 de junio de 1793.
- f. 135r-135v: Juan Navarro, director general de Alcabalas, 26 de junio de 1793 (plantea que si continúa con su trabajo de alcabalas y pulques o atiende la respuesta solicitada. Por supuesto no contesta).
- f. 135v-140r: Respuesta de Juan Matías de Lacunza, ministro contador de Cajas Reales de Veracruz, Veracruz, 13 de julio de 1793 (el actual método de comercio libre ha quitado las trabas).
- f. 140r-144v: Respuesta de Pedro María de Monterde, contador del Tribunal de Cuentas, México, 16 de julio de 1793 (parece innegable que el comercio se halla en grave atraso).
- f. 144v-157v: Respuesta de José Ignacio de Uriarte, factor de los Cinco Gremios, Veracruz, 17 de julio de 1793 (a favor del libre comercio).
- f. 157v-167v: Respuesta de Thomas Murphy, Veracruz, 20 de julio de 1793 (a favor del libre comercio).
- f. 167v-168v: Carta del conde de Revillagigedo a Diego Gardoqui, México, 30 de junio de 1793 (indica que el estado de guerra ha distraído su atención del expediente, pero si es posible su conclusión para fines del mes de agosto se lo enviará).

El conde de Revillagigedo hace un difuso informe sobre averiguar si hay decadencia en el comercio de aquellos reinos y en caso de haberla, hallar las causas de ellas y sus remedios, 31 de agosto de 1793, 62 fojas [anverso y reverso], AGI, Méx. 1554.